



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE:	Olga Cecilia Jaimes Galvis.
DEMANDADA:	Colpensiones
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Confirma
Radicado	05001-31-05-016-2018-00069-02 (232) 05001310501620180006902

En la ciudad de Medellín, a los cuatro (04) días de septiembre de dos mil veintitrés (2023), la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **Luz Amparo Gómez Aristizábal**, **María Eugenia Gómez Velásquez**, y quien actúa como ponente, **Claudia Angélica Martínez Castillo** se reunió para resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la decisión proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín al interior del proceso ordinario laboral que le sigue a la **Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones**.

Una vez agotado el trámite previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala acoge el proyecto de la ponente que se traduce en la siguiente decisión:

AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES

La señora **Olga Cecilia Jaimes Galvis**, formuló demanda ordinaria contra la administradora Colpensiones (folios 4 a 8, Archivo 01 Expediente), en la que reclamó el reconocimiento de una pensión de vejez más los intereses moratorios, pero en la sentencia de primera instancia del 17 de noviembre de 2021 no obtuvo decisión favorable, y en la del 7 de septiembre de 2022, el tribunal al resolver el grado jurisdiccional de consulta la confirmó (Archivo 05, Carpeta Segunda Instancia).

Devuelto el expediente al juzgado de origen, en auto del 18 de octubre de 2022, el *a quo* señaló las agencias en derecho en primera instancia en \$1.000.000 a cargo de la demandante (Archivo 04AutoLiqCostas), decisión contra la que el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, argumentando que, la fijación de agencias resulta desproporcionada en relación con la gestión realizada por la defensa de la demandada, además que, la demandante actualmente no tiene capacidad económica suficiente, para asumir ese pago, así lo indicó:

La condena en costas y agencias son demasiados altas.

Las agencias en derecho en mi sentir son desproporcionadas, amén de que la demanda es por concepto de un retroactivo pensional que reclamó la demandante por considerar que la demandada adeudaba, aunado a que no posee un buen ingreso mensual, que no tiene recursos para asumir tremenda condena, si paga esas agencias no tendría capacidad económica para sufragar su mínimo vital y el de su núcleo familiar.

Si las anteriores razones no fueran suficientes para que se disminuyan considerablemente, tales agencias, debo manifestarle al Despacho, que la demandante es una persona de escasos recursos y no tendría para pagar las costas tasadas, cosa que no sucede con la entidad demandada que tiene un gran músculo financiero, todo esto debe tenerlo presente el despacho al momento de volverlas a fijar, amén de que, a todas luces del C. G. del P., se debe auscultar la intencionalidad de las partes con el proceso, es decir, si la acción es manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o cuando los hechos alegados son contrarios a la realidad y como se observa que la demandante lo que hizo fue ejercer su derecho fundamental a reclamar conceptos que consideraba vulnerados por la entidad demandada.

Las agencias no miraron la labor desempeñada por el abogado de la entidad, que contestó una demanda, asistió a una audiencia, amén de que la entidad a la luz del artículo 366 del C.G.P numeral 3, no demostró los gastos en que incurrió en dicho proceso, de modo que las agencias no son acordes con el trabajo desplegado y mucho menos con lo probado en gastos en el proceso.

Estas agencias son una forma de limitar a la población de bajos ingreso al acceso a la justicia, situación que no se permite en un Estado Social de Derecho.

En el auto del 15 de marzo de 2023, el juzgado desestimó los argumentos del recurso horizontal, señalando que *«la imposición a las costas además de su liquidación permaneció incólume y obedeció a las resultas en sentencia emitida por esta dependencia y confirmada en su integridad por el Tribunal Superior de Medellín, por lo anterior, se concluye que no hay lugar a reponer la liquidación»*.

II. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.

Colpensiones

En sus alegatos, solo solicita que la providencia objeto de revisión se confirme.

III. CONSIDERACIONES

3.1. PROBLEMA JURÍDICO

En virtud de los argumentos expuestos en el recurso de alzada, y considerando que el estudio del plenario en la segunda instancia se limita única y exclusivamente al punto de censura enrostrado por el apelante al proveído impugnado, según lo dispone el artículo 66 A

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, adicionado por la Ley 712 de 2001, esta Sala se ocupará de analizar, si la primera instancia desatendió las reglas para la fijación de las agencias en derecho impuestas a la demandante.

3.2. PRESUPUESTOS PARA LA VIABILIDAD DEL RECURSO.

Tenemos que hay legitimación en la parte que recurre porque con la decisión atacada hay mengua en sus intereses, el recurso es tempestivo, está cumplida la carga procesal de la sustentación y la providencia es susceptible de apelación.

3.3. PREMISAS NORMATIVAS

El artículo 365 del Código General del Proceso en su numeral 1°, aplicable por analogía al procedimiento laboral, de conformidad con el artículo 145 C.P.T y de la S.S., establece que, «...Se condenará en costas **a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto**» (negrilla fuera del texto).

Por mandato del artículo 366 de la misma codificación, aplicable a todos los procesos judiciales, para la fijación de las agencias en derecho deben acogerse las tarifas fijadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las que, **por la fecha de la presentación de la demanda, 30 de enero de 2018** (archivo 01 Expediente), se encontraban regidas por **el Acuerdo PSAA16 – 10554 del 05 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura**, el cual dispone en su artículo 5°, numeral 1°, lo siguiente:

Artículo 5°. Las tarifas de agencias en derecho son:

1. Procesos Declarativos en General(...)

En primera instancia.

- a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:
 - (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.
 - (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.
- b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.”

Por su parte, el numeral 4o del artículo 366 del CGP dice que, cuando las tarifas establezcan un mínimo y un máximo, *«el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas»*.

De acuerdo con lo anterior, las agencias en derecho deben corresponder a la autonomía y al sano criterio del fallador, pero guardando obviamente proporcionalidad con la condena

impuesta, atendiendo pautas de equidad y razonabilidad, como la complejidad del proceso, su duración, la gestión del apoderado, su acuciosidad en el desarrollo de la actuación, entre otros, y **siempre que se mueva dentro de los tope mínimos y máximos** consagrados en el acuerdo referenciado.

3.4. CASO CONCRETO

En el caso que nos ocupa, el procurador judicial de la señora Jaimes Galvis se muestra inconforme con el auto que aprueba la liquidación de las costas, y concretó sus reparos a una supuesta desproporción en la fijación de las costas frente a la gestión realizada por la parte opositora, además que, su defendida se encuentra en serie dificultades económicas que le impiden asumir esa carga.

En la providencia recurrida, el Juez de primera instancia argumentó que la imposición de esa condena obedece a que la decisión resultó desfavorable a las pretensiones de la demanda, y la sentencia absolutoria proferida por ese despacho judicial la confirmó el Tribunal Superior de Medellín, por lo anterior, concluye que no hay lugar a reponer lo decidido.

Lo primero que debemos señalar, para dirimir el asunto, es que conforme a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso ya citado, se impondrán costas «**a la parte vencida en el proceso**», situación que coincide con lo acontecido en el asunto bajo examen, ya que, en la sentencia de primera instancia, la parte demandante no obtuvo lo pretendido, y esta corporación confirmó la decisión, por consiguiente, al no salir adelante sus pretensiones era procedente imponer la condena en costas.

Lo segundo es que, según lo reglado en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, queda determinada que el valor de las agencias en derecho para los procesos en primera instancia, en asuntos sin cuantía estas se fijarán entre 1 y 10 SMMLV.

Bajo estos presupuestos, corresponde a esta colegiatura determinar si el monto fijado por ella *quo* se ajusta a lo previsto en el compendio o, si no es así, y deben reducirse.

Es menester precisar que la norma citada no puede estudiarse e interpretarse aisladamente, pues se observa que el artículo 2° del Acuerdo hace alusión a los criterios en los cuales debe basarse el juzgador para su tasación. Indica el precepto:

Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y

demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

Naturalmente que, el juzgador cuenta con diferentes pautas para determinar la suma correspondiente y aunque lo hace discrecionalmente, debe sujetarse a los límites enunciados. Así, el presente asunto corresponde al reconocimiento de una pensión de vejez, que resultó desfavorable a las pretensiones de la reclamante, lo que permite al juez imponer a la vencido un monto de hasta 10 salarios mínimos legales; no obstante, fijó un (1) smlmv, cantidad que se encuentra dentro los parámetros normativos ya advertidos y que se compadece con la gestión desplegada por la defensa de la demandada, la duración y atención del trámite de primera instancia.

Ahora, el concepto de costas incluye las agencias en derecho, es decir, los gastos por concepto de apoderamiento dentro del trámite judicial, y que el juez los reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora acatando los criterios dispuestos en los numerales 3° y 4° del artículo 366 del CGP, en ese entendido se prevé que no se constituyan en una condena "*automática*" u "*objetiva*" frente a aquel que resulta vencido en el litigio.

En el análisis que el juzgador hizo para fijar las costas en 1 smlmv, no se apartó de la realidad procesal, por lo tanto no acierta la recurrente cuando asevera que la actividad desarrollada por la opositora no ameritaba una condena de tal magnitud; contrario a ello, al examinar el expediente se observa que el proceso tuvo una duración mayor a cuatro (4) años, la demandada ejerció la defensa judicial y vigilancia sobre este proceso, presentando contestación de demanda y excepciones de mérito, compareció a las audiencias de los artículos 77 y 80 del CPTSS y presentó alegatos en segunda instancia, solicitando la confirmación del proveído de la de primer grado, por lo que, sí está probada la gestión realizada por la entidad.

Así, la suma asignada por el Juez de primera instancia al tasar las agencias en derecho a cargo de la demandante en un millón de pesos (\$1.000.000), esto es en el equivalente de un salario mínimo legal vigente para la época, no es una cantidad exorbitante, ni supera los criterios definidos en el **Acuerdo PSAA16 – 10554 del 05 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura**, como se puede notar, lo hizo guardando armonía con la actividad litigiosa desplegada y el trámite impartido, porque la parte activa resultó vencida en el proceso, luego, hay lugar a la imposición de las costas procesales, según lo dispone el artículo 365 del CGP, circunstancia que obedece a un criterio objetivo, por lo tanto, no requiere un análisis de la buena fe de las partes.

Sobre este tópico, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia

del 22 de enero de 2013, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno, Rad. 40,993 sostuvo:

Al respecto es preciso anotar que la disposición referida contiene un criterio objetivo, dado que no condiciona su imposición a circunstancia distinta a la pérdida del proceso o uno de los recursos a que se refiere, de allí que el actuar de buena fe no constituye razón de exoneración de la obligación que tiene la parte vencida de pagar los gastos generados con ocasión del proceso. (subrayado de Sala)

Verificado hasta aquí que las costas se liquidaron en legal forma, debemos abordar ahora el problema que propone la recurrente, esto es, que se le exonere totalmente de pagarlas o se disponga un valor inferior a los límites permitidos, sobre lo primero debemos señalar que, si bien el proceso laboral está regido entre otros por el principio de gratuidad, lo cierto es que la parte vencida en juicio deberá asumir de las expensas judiciales que el litigio genere.

Además, hay que recordar que la posibilidad de discutir el monto de la condena en costas a que habilita el artículo 365 del CGP no se extiende a modificar o revocar la sentencia que las impuso, y, por lo tanto, advirtiendo que la accionante no controvertió este aspecto en la oportunidad procesal correspondiente, no está legitimada para hacerlo al liquidar costas.

El segundo aspecto, esto es que se reduzca el valor de las costas liquidadas en primera instancia, ya la Sala Laboral de la Corte Suprema en ocasión anterior se pronunció sobre la imposibilidad de validar las precarias condiciones de la parte vencida como criterios para exonerarla de la imposición de la condena en costas y que el principio de gratuidad de la justicia no es absoluto, en auto del 12 de julio de 2021, M.P. Cecilia Margarita Durán Ujueta, Rad. 79571, en el que dijo:

Las costas se imponen en forma objetiva una vez se verifique que efectivamente se causaron, lo que, en este trámite extraordinario, es evidente que ocurrió, dado que, como atrás se dijo, hubo réplica (f.º 23 a 26 del cuaderno de la Corte), por lo que no es viable acudir a criterios subjetivos para determinar la exoneración de la parte vencida.

Las manifestaciones relacionadas con la precaria situación económica de la recurrente no tienen vocación de prosperar, habida cuenta que: i) el principio de gratuidad de la justicia no es absoluto, aserto que tiene sustento legal en el artículo 6º de la Ley 270 de 1996, que dispone:

«La administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las expensas, agencias en derecho y costas judiciales» (CSJ AL, 26 oct. 1999, rad. 12224, reiterado en el CSJ AL1570-2013 y CSJ AL3612-2017); y ii) el fundamento objetivo de la liquidación de las costas, sobre lo cual la Sala se ha pronunciado entre otras, en auto CSJ AL2126-2016

Huelga decir que en este caso no están dados los presupuestos fácticos que motivaron la decisión de esta sala proferida al interior del proceso identificado con el radicado 05001 31 05 002 2021 00320 02, MP Dra. María Eugenia Gómez Velásquez, en la que se planteó un conflicto jurídico referente a la disminución del monto de las costas, y se accediendo a ello, en razón a que se hallaron probadas las circunstancias aducidas por la parte vencida, en función con la naturaleza del asunto allí debatido, se trató de una pensión de invalidez, y decidió reducirlas a ¼ de smlmv, en la que se consideró:

El asunto a dirimir radica en verificar si hay lugar a modificar el Auto que aprobó la liquidación de Costas procesales, en cuanto al valor de las agencias en derecho de Primera Instancia. Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente modificar el Auto recurrido, por las siguientes razones:

El numeral 4º del artículo 366 del Código General del Proceso, señala que la normatividad a aplicarse para la fijación de las agencias en derecho es la que establezca el Consejo Superior de la Judicatura; así:

“... 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas...”.

Por su parte, el artículo 2º del Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016, emanado del Consejo Superior de la Judicatura – aplicable a este caso por ser el vigente para la fecha en que se radicó la demanda -, señala los criterios para la fijación de las agencias en derecho, de la siguiente manera:

“...ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites...” (Negritas fuera de texto).

Con relación a los procesos declarativos en general, el artículo 5º del Acuerdo citado - 10554 de 2016 -, establece que, en Primera Instancia, cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario de mayor cuantía, las tarifas de las agencias en derecho se fijan entre el 3% y el 7.5% de lo pedido y cuando se trata de asuntos sin cuantía, entre 1 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes; veamos:

“...ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.

(...)

En primera instancia.

a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:

- (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.
- (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.

b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.

En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V...” (Negritas fuera de texto).

Como se puede observar, la norma aplicable establece el valor de las agencias en derecho, como topes hasta los cuales pueden ser fijadas, dependiendo de cada caso, no una tarifa única, sino un rango dentro del cual se puede mover el operador jurídico, teniendo en cuenta para ello la naturaleza, calidad y duración útil de la de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó, la cuantía de las pretensiones y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables.

Concretamente, cuando las tarifas de las agencias en derecho correspondan a porcentajes, su tasación debe corresponder a una ponderación inversamente proporcional, tal como lo dispone el Parágrafo 3º del artículo 3º del Acuerdo 10554 de 2016; en los siguientes términos:

“...PARÁGRAFO 3º. Cuando las tarifas correspondan a porcentajes, en procesos con pretensiones de índole pecuniario, la fijación de las agencias en derecho se hará mediante una ponderación inversa entre los límites mínimo y máximo y los valores pedidos. Esto es, a mayor valor menor porcentaje, a menor valor mayor porcentaje, pero en todo caso atendiendo a los criterios del artículo anterior...”.

En el asunto debatido, se pretendía el reconocimiento y pago de pensión de invalidez en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, con efectos a partir del 14 de agosto de 2019, mesadas adicionales, intereses moratorios o indexación; profiriéndose Sentencia absolutoria en Primera Instancia el día 21 de febrero de 2022, contra la cual el demandante interpuso recurso de Apelación, decisión confirmada en esta Segunda Instancia el 10 de febrero de 2023.

El Juzgado fijó como agencias en derecho de Primera Instancia a cargo del demandante, la suma de \$1.160.000 equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente del año 2023, en aplicación del literal b) del numeral 1º del artículo 5º del Acuerdo 10554 de 2016, según el cual, en los asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, las agencias pueden fijarse entre 1 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, acudiendo el Juez al rango más bajo contemplado en la normatividad aplicable.

No obstante, considera esta Judicatura que en el caso concreto, es procedente acudir al numeral 4º del artículo 366 del Código General del Proceso, aplicable por remisión analógica del 145 del Código Procesal Laboral, para modificar el valor de las agencias en derecho a cargo del demandante, atendiendo a las “circunstancias especiales” expuestas y que se encuentran acreditadas en el expediente, esto es, que al señor Rivera Pérez le fue asignado el 70.52% de pérdida de capacidad laboral de origen común, con fecha de estructuración el 14 de agosto de 2019, por los diagnósticos insuficiencia renal crónica no especificada e hipertensión esencial primaria (fls 15 a 21), afirmando que es persona de escasos recursos económicos, lo que tiene sustento en que, el ingreso base de cotización reportado en la historia laboral, en las épocas de cotización, ha sido en general por el salario mínimo legal mensual vigente.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, modificar las agencias en derecho de Primera Instancia (fijadas en \$1.160.000, esto es, un (1) SMLMV del año 2023), para fijarlas en cuantía equivalente a un cuarto (1/4) del SMLMV para el año 2022, cuando se profirió la Sentencia de primera instancia (\$250.000) (negritas intencionales).

Mientras que, en este caso, visto desde lo fáctico la parte demandante perseguía el reconocimiento del retroactivo de la pensión de vejez desde el 1º de agosto de 2011 debido a su desacuerdo con la administradora Colpensiones que se la concedió a partir del 1º de noviembre de 2012 en cuantía de \$1.472.864 (suma equivalente a 2.59 smlv a esa época), pero resultó vencida en el proceso, pues si bien se acreditó que tenía derecho a la prestación desde la fecha aducida, las pretensiones referentes al pago de las mesadas retroactivas se desestimaron como consecuencia de su extinción al haber operado el fenómeno de la prescripción.

Ahora bien, la inconformidad con el monto de las costas liquidadas en primera instancia estuvo fundada en que «son demasiado altas», sin aportar evidencia que acredite que la demandante está imposibilitada para asumir la condena en costas, mucho más si se observa que actualmente la mesada asciende aproximadamente a 2,587,019.39, por consiguiente, las razones que dio carecen de respaldo alguno:

La condena en costas y agencias son demasiado altas.

Las agencias en derecho en mi sentir son desproporcionadas, amén de que la demanda es por concepto de un retroactivo pensional que reclamó la demandante por considerar que la demandada adeudaba, aunado a que no posee un buen ingreso mensual, que no tiene los recursos para asumir tremenda condena, si paga esas agencias no tendría capacidad económica para sufragar su mínimo vital y el de su núcleo familiar.

Si las anteriores razones no fueran suficientes para que se disminuyan considerablemente, tales agencias, debo manifestarle al Despacho, que la demandante es una persona de escasos recursos y no tendría para pagar las costas tasadas, cosa que no sucede con la entidad demandada que tiene un gran musculo financiero, todo esto debe tenerlo presente el despacho al momento de volverlas a fijar, amén de que a las luces del C.G. del P., se debe auscultar la intencionalidad de las partes con el proceso, es decir, si la acción es manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o cuando los hechos alegados son contrarios a la realidad y como se observa que la demandante lo que hizo fue ejercer su derecho fundamental a reclamar conceptos que consideraba vulnerados por la entidad demandada.

Siendo así, la orden del juzgado atendió los criterios y la regulación del numeral 1º del artículo 365 del CGP, y el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta el tope mínimo que se podría establecer para este caso en particular.

Conforme con lo dicho hasta aquí, esta Sala confirmará la decisión del Juzgado.

Sin costas en esta instancia, por no aparecer causadas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE

PRIMERO: Confirmar la decisión del Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, del 18 de octubre de 2022, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por **Olga Cecilia Jaimes Galvis** contra la **Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones**, por lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia, conforme lo expuesto en la parte motiva.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** y se firma en constancia.

Las magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE
CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 155
del 6 de septiembre de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>